

Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

En estos autos Rol N° **C-5359-2021** del Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de **dos de agosto de dos mil veintidós**, se hizo lugar a la demanda deducida por el abogado señor Mario Armando Cortez Muñoz, en representación de don **JUAN CARLOS RAMÍREZ PEÑA**, por indemnización de perjuicios por daño moral, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar a título de daño moral, la suma de ochenta millones de pesos (\$80.000.000).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, la confirmó con declaración rebajando el monto a la suma de ocho millones de pesos (8.000.000).

Contra esa sentencia por la parte demandante, dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, en cuanto al recurso de casación en el fondo, el recurrente denuncia como error de los sentenciadores el infringir las normas reguladoras de la prueba, por cuanto no se puede exigir que se prueben hechos que son públicos y notorios como el daño y su extensión, en un ser humano que fue sometido a crímenes de lesa humanidad, como detención ilegal y arbitraria, crueles torturas físicas y psicológicas, inhumanas y deliberadas, persecución y prisión política.

**Segundo:** Que como se desprende de autos, son hechos indiscutidos, asentados en el fallo de primera instancia en su razonamiento vigésimo y confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, los siguientes:

*“...fue detenido el 5 de octubre de 1989 en plaza Italia, en manifestaciones, por Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes lo golpearon hasta que perdió el*



*conocimiento, siendo trasladado a la Comisaria de Miguel Claro, donde lo siguieron golpeando hasta que llegaron los abogados de la Vicaria de la Solidaridad, que traían un recurso de amparo. Luego de ello fue llevado por Carabineros a la Posta Central, siendo amenazado en el camino para que no dijera nada. Con posterioridad fue trasladado a la penitenciaría donde siguió siendo golpeado, permaneció allí alrededor de 12 días. Luego fue trasladado a la cuarta fiscalía militar, donde lo dejaron libertad incondicional y con amenazas de que no contara lo sucedido.”*

**Tercero:** Que sobre la base de los presupuestos consignados precedentemente la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmo con declaración la sentencia de primer grado acogiendo, argumentando en su razonamiento segundo que *“Que, sin embargo, en cuanto al daño moral, el razonamiento que se contiene en el considerando Vigésimo conduce a esta Corte a concluir que el monto fijado resulta excesivo atendida la debilidad probatoria en la acreditación completa de extensión del daño causado en la víctima, motivo por el cual se reducirá prudencialmente a la suma de \$8.000.000.- (ocho millones de pesos). Atendido, además, que el actor estuvo privado de libertad por 12 días a contar del 5 de octubre 1989.”*

**Cuarto:** Que, en cuanto a la impugnación de fondo formulada por la defensa, reclamado que en el establecimiento de la indemnización se vulneraron las leyes reguladoras de la prueba, indicando como tales los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Código Civil, en relación con los artículos 1698, 1712, 2314 y 2329 del mismo código las restantes normas invocadas, según la uniforme y reiterada jurisprudencia de esta Sala Penal, carecen del carácter de decisoria litis. La citada norma establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan



constituir la prueba completa de un hecho, en este caso, de su participación, en los delitos objeto de la sentencia.

De dichos extremos, esta Corte ha aclarado que sólo constituyen normas reguladoras de la prueba, que pueden ser revisadas, en sede de casación, la contenida en el ordinal 1°, esto es, que las presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales y, del ordinal 2°, la exigencia de multiplicidad de ellas. Los demás extremos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado y que no puede ser controlado por esta Corte.

Sin embargo, la invocación genérica del mencionado precepto que ha efectuado por el impugnante, atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso, lo que impide a este tribunal concluir, con toda precisión, en qué consistieron los errores de derecho y de qué modo influyeron en lo decisorio.

Que de la lectura del recurso no demuestra la imputación de haberse vulnerado tal disposición, pues únicamente se plantea una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia conforme a los cuales se estimó acreditada la



intervención de su mandante en los hechos, discordándose solo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, deducido por el abogado Mario Armando Cortez Muñoz, en representación de don **JUAN CARLOS RAMÍREZ PEÑA**, en contra de la sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 13.135-2022, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 13.306-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M., y el Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. No firma la Ministra Suplente Sra. Quezada y el Abogado Integrante Sr. Munita, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.





En Santiago, a veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

